



HONORABLE SEÑOR JUEZ:

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN PRIMERA INSTANCIA (reparto)

(se remita a quien corresponda)

Florencia-Caquetá.

Medio de Control: Reparación Directa por Responsabilidad Médica.
Demandantes: María Ester Sabi Almario, Albenys Sabi Almario, José María Sabi Almario, Benjamín Sabi Almario, Abundio Sabi Almario, Edgar Sabi Almario, María de los Milagros Sabi Almario, Octavio Sabi Almario, Bellanide Sabi Almario, Sandra Milena Sabi Almario, Marleni Sabi Almario y José Joaquín Sabi Almario.
Apoderado: Constantino Costain Flor Campo
Demandados: E.S.E Hospital María Inmaculada, Asmet Salud E.P.S, Ministerio de Salud y Protección Social y Secretaria de Salud Departamental.

Respetado señor Juez,

CONSTANTINO COSTAIN FLOR CAMPO, ciudadano colombiano, hombre mayor de edad, domiciliado y residente en Florencia-Caquetá, identificado con Cédula de Ciudadanía No.17.639.583 de Florencia-Caquetá, Abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No.248.009 del C.S. de la J., obrando en condición de Apoderado Judicial de:

- **María Ester Sabi Almario**, mujer mayor de edad, identificada con Cédula de Ciudadanía No.40.779.943 de Florencia-Caquetá, quien posee la calidad de Hija de la Víctima Directa.
- **Albenys Sabi Almario**, mujer mayor de edad, identificada con Cédula de Ciudadanía No.40.610.795 de Florencia-Caquetá, quien ostenta la calidad de Hija de la Víctima Directa.
- **José María Sabi Almario**, hombre mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No.17.650.617 de Florencia-Caquetá, quien detenta la calidad de Hijo de la Víctima Directa.
- **Benjamín Sabi Almario**, hombre mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No.17.634.901 de Florencia-Caquetá, quien dispone la calidad de Hijo de la Víctima Directa.
- **Abundio Sabi Almario**, hombre mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No.17.644.635 de Florencia-Caquetá, quien posee la calidad de Hijo de la Víctima Directa.
- **Edgar Sabi Almario**, hombre mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No.17.690.473 de Florencia-Caquetá, quien detenta la calidad de Hijo de la Víctima Directa.
- **María de los Milagros Sabi Almario**, mujer mayor de edad, identificada con Cédula de Ciudadanía No.40.777.116 de Florencia-Caquetá, quien ostenta la calidad de Hija de la Víctima Directa.
- **Octavio Sabi Almario**, hombre mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No.17.647.862 de Florencia-Caquetá, quien dispone la calidad de Hijo de la Víctima Directa.



- **Bellanide Sabi Almario**, mujer mayor de edad, identificada con Cédula de Ciudadanía No.30.506.051 de Florencia-Caquetá, quien ostenta la calidad de Hija de la Víctima Directa.
- **Sandra Milena Sabi Almario**, mujer mayor de edad, identificada con Cédula de Ciudadanía No.40.670.852 de Florencia-Caquetá, quien posee la calidad de Hija de la Víctima Directa.
- **Marleni Sabi Almario**, mujer mayor de edad, identificada con Cédula de Ciudadanía No.40.766.496 de Florencia-Caquetá, quien detenta la calidad de Hija de la Víctima Directa.
- **José Joaquín Sabi Almario**, hombre mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No.17.655.004 de Florencia-Caquetá, quien dispone la calidad de Hijo de la Víctima Directa.

Personas que actúan en calidad de Víctimas en el asunto de la referencia, Respetuosamente por medio del presente escrito me permito impetrar ante su Despacho **MEDIO DE CONTROL DE REPARACION DIRECTA**, conforme lo consagra el artículo 140 del C.P.A.C.A., contra la **E.S.E HOSPITAL MARIA INMACULADA, ASMET SALUD E.P.S, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL y SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL**, o quien haga sus veces o esté encargado de sus funciones, para que previo los trámites del Proceso de qué trata la Parte II, Título V, Capítulo V, arts. 179 y ss., del Código Contencioso Administrativo, se efectúen las siguientes o similares:

DECLARACIONES Y CONDENAS

2

PRIMERO: Declarar que **E.S.E HOSPITAL MARIA INMACULADA, ASMET SALUD E.P.S, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL y SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL**, es responsable administrativa, civil y patrimonialmente de la totalidad de los daños y perjuicios Morales , Materiales que fueron ocasionados como consecuencia del fallecimiento de la señora **LEONOR ALMARIO DE SABI**, quien en vida se identificaba con Cédula de Ciudadanía No.26.617.958 de Florencia-Caquetá, fallecimiento que se produjo el día 28 de julio de 2021, en el servicio de Urgencias de la **E.S.E HOSPITAL MARIA INMACULADA** de la ciudad de Florencia Caquetá, debido a una mala praxis del médico tratante que se encontraba de turno.

SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se CONDENE a **E.S.E HOSPITAL MARIA INMACULADA, ASMET SALUD E.P.S, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL y SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL** a RECONOCER y CANCELAR a favor de los demandantes a título de **PERJUICIOS MORALES**, causados por la muerte de la señora **LEONOR ALMARIO DE SABIDO**, el valor equivalente a **SEISCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES**, distribuidos de la siguiente manera:

Beneficiarios	No. de Salarios Correspondientes
➤ María Ester Sabi Almario.	Cincuenta Salarios Mínimos Legales Vigentes.
➤ Albenys Sabi Almario.	Cincuenta Salarios Mínimos Legales Vigentes.
➤ José María Sabi Almario.	Cincuenta Salarios Mínimos Legales Vigentes.
➤ Benjamín Sabi Almario.	Cincuenta Salarios Mínimos Legales Vigentes.
➤ Abundio Sabi Almario.	Cincuenta Salarios Mínimos Legales Vigentes.



- | | |
|---------------------------------------|--|
| ➤ Edgar Sabi Almario. | Cincuenta Salarios Mínimos Legales Vigentes. |
| ➤ María de los Milagros Sabi Almario. | Cincuenta Salarios Mínimos Legales Vigentes. |
| ➤ Octavio Sabi Almario. | Cincuenta Salarios Mínimos Legales Vigentes. |
| ➤ Bellanide Sabi Almario. | Cincuenta Salarios Mínimos Legales Vigentes. |
| ➤ Sandra Milena Sabi Almario. | Cincuenta Salarios Mínimos Legales Vigentes. |
| ➤ Marleni Sabi Almario. | Cincuenta Salarios Mínimos Legales Vigentes. |
| ➤ José Joaquín Sabi Almario. | Cincuenta Salarios Mínimos Legales Vigentes. |

TERCERO: Que, como consecuencia de lo anterior, se **RECONOZCA** y **CANCELE** a favor de los demandantes a título de **PERJUICIOS MATERIALES, LUCRO CESANTE** y **DAÑO EMERGENTE**, causados por la muerte de la señora **LEONOR ALMARIO DE SABI**, el valor equivalente a **SEISCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES**, distribuidos de la siguiente manera:

Beneficiarios	No. de Salarios Correspondientes
➤ María Ester Sabi Almario.	Cincuenta Salarios Mínimos Legales Vigentes.
➤ Albenys Sabi Almario.	Cincuenta Salarios Mínimos Legales Vigentes.
➤ José María Sabi Almario.	Cincuenta Salarios Mínimos Legales Vigentes.
➤ Benjamín Sabi Almario.	Cincuenta Salarios Mínimos Legales Vigentes.
➤ Abundio Sabi Almario.	Cincuenta Salarios Mínimos Legales Vigentes.
➤ Edgar Sabi Almario.	Cincuenta Salarios Mínimos Legales Vigentes.
➤ María de los Milagros Sabi Almario.	Cincuenta Salarios Mínimos Legales Vigentes.
➤ Octavio Sabi Almario.	Cincuenta Salarios Mínimos Legales Vigentes.
➤ Bellanide Sabi Almario.	Cincuenta Salarios Mínimos Legales Vigentes.
➤ Sandra Milena Sabi Almario.	Cincuenta Salarios Mínimos Legales Vigentes.
➤ Marleni Sabi Almario.	Cincuenta Salarios Mínimos Legales Vigentes.
➤ José Joaquín Sabi Almario.	Cincuenta Salarios Mínimos Legales Vigentes.

3

CUARTO: Que se actualicen las anteriores sumas dinerarias desde qué se hizo exigible su pago hasta la fecha en que se emite decisión definitiva en este proceso de acuerdo a la variación de índices de precios al consumidor certificado por el DANE y se reconozcan intereses moratorios sobre las mismas sumas dinerarias.

QUINTO: Las sumas anteriores se ajustarán a la fecha del fallo de sentencia. Además, devengarán los intereses de qué trata el artículo 192 del C.C.A. y se ejecutarán acorde con el mismo.

SEXTO: Que se ordene a **E.S.E HOSPITAL MARIA INMACULADA, ASMET SALUD E.P.S, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL** y **SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL** pagar las Costas y Agencias de Derecho que se causen en el proceso de la referencia.

FUNDAMENTOS FÁCTICOS

1. La señora **LEONOR ALMARIO DE SABI**, quien en vida se identificada con Cédula de Ciudadanía No.26.617.958 de Florencia-Caquetá, falleció el día 28 de julio de 2021, en el servicio de Urgencia de la **E.S.E HOSPITAL MARIA INMACULADA**, a las 02:00 A.M aproximadamente en la cama 26 de Urgencias, por una mala praxis del médico tratante.
2. La señora **LEONOR ALMARIO DE SABI**, contaba con 76 años de edad al momento de fallecer, y padecía problemas de salud, como, por ejemplo, problemas cardiacos, por lo cual, disponía de un marcapasos desde hace 6 años.



3. La occisa, ingreso el día 27 de julio de 2021, por urgencia al **HOSPITAL MARIA INMACULADA**, aproximadamente a las 03:54 P.M, debido a presentaba un cuadro clínico de aproximadamente 3 semanas de disnea, es decir, dificultad para respirar y dolor torácico, por lo cual, ingresa para ser valorada por el cardiólogo. Siendo las 02:00 A.M del día 28 de julio de 2021, se produce el deceso de la señora, debido a que le médico tratante decide cambiarle la formula medica sin tener en cuenta la formula prescrita por el anterior medico de turno.
4. La señora **LEONOR ALMARIO DE SABI**, tenía 12 hijos, quienes ya se encuentran debidamente identificados, y quienes tuvieron que padecer el duro dolor de la muerte de su querida y señora madre por el mal proceder de médico tratante que se encontraba de turno, por lo cual, ostentan la calidad de Víctimas Indirectas dentro del trámite de la referencia.
5. El artículo 90 de la Constitución dice que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. En este caso, se produjo un daño antijurídico al demandante quien no estaba en la obligación legal de soportarlo.
6. La responsabilidad de la administración ha producido muchos perjuicios a mis poderdantes. En relación con la tasación del perjuicio, se debe tener en cuenta el artículo 16 de la ley 446 de 1998, el cual consagra que la indemnización debe ser integral.
7. La entidad demandada, no ha indemnizado hasta la fecha a los demandantes, los perjuicios materiales, morales que fueron causados por el notorio daño anti jurídico.
8. Existe una relación de causalidad entre el daño antijurídico sufrido a vida de la señora **LEONOR ALMARIO DE SABI** y la actividad desarrollada por la entidad demandada.
9. Mediante apoderado judicial la familia SABI ALMARIO, solicitó audiencia de conciliación extrajudicial ante la PROCURADURIA 71 JUDICIAL I ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA, obteniendo de ello, CERTIFICACION calendada el 22 de SEPTIEMBRE de 2022, donde no fue posible la conciliación por inasistencia del convocante, debido a que se estuvo pendiente de la fijación de dicha audiencia, pero no me fue notificada y de esta manera se da por agotado el requisito de procedibilidad del medio de control.
10. De acuerdo a lo esbozado anteriormente, respetuosamente me permito dirigirme a su Despacho con el fin de citar los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Las entidades demandadas vulneraron las siguiente disposiciones superiores y legales:

Las disposiciones de los Artículos 6 y 90 de la C.P.

En su **artículo 6:**

“Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la **Constitución** y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”



En su **artículo 90:**

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”

Así mismo lo consagrado en el Artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo

“En los términos del [artículo 90 de la Constitución Política](#), la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.

Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.

En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”

De igual forma lo incoado en la Ley 640 de 2001 artículos 1, 2, 3, 4, 15, 20, 23, 24, 25 y 37; la Ley 1285 de enero 22 de 2009: artículo 13 (que aprobó como artículo nuevo el 42 A de la Ley 270 de 1996).

5

JURISPRUDENCIA:

- Sentencia del 31 de agosto de 2006, Exp.15772, MP. Ruth Stella Correa
- Sentencia del 14 de mayo de dos mil catorce 2014 Consejera pon: OLGA MELIDA VALLE DE LA HOZ. Rad: (30724).
- Sentencia del 29 de abril de dos mil quince 2015 Consejero ponente: RAMIRO DE JESUS PAZOS GUERRERO, Rad: (25574).
- Sentencia del 3 de octubre de 2016, Rad 1999-02059-01(40057), Consejero P: RAMIRO PAZOS GUERRERO.
- Sentencia del 26 de febrero de 2018, Consejero ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH

DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Sin perjuicio del régimen de responsabilidad que pueda surgir en el presente caso, el Honorable Consejo de Estado ha manifestado que la aplicación de otro régimen de responsabilidad patrimonial distinto al invocado en la demanda, tiene su causa en el principio *iura novit curia*.

Sobre este punto la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo concluyó que en forma excepcional, cuando no se juzgue la legalidad o ilegalidad de la actuación u omisión de la Administración, *"sino que directamente se reclama la reparación del daño mediante el reconocimiento de una indemnización, el juez puede interpretar, precisar el derecho aplicable y si es del caso modificar, de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda los fundamentos de derecho invocados por el demandante"*.



Nuestra Carta Política, en su artículo 1, concibe el Estado Social de Derecho como aquel de profundo respeto por la dignidad humana y la solidaridad de las personas con una prevalencia del interés general sobre el particular; norma que debe concordarse con el artículo 2 en su inciso 2 al determinar que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derecho y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

El artículo 90 de nuestra Constitución Política en la última parte de este inciso hace relación a la causalidad, y de ella depende el examen de la imputación o adjudicación del daño a las autoridades públicas. La Carta Política en el citado artículo 90 nos enseña que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que se ocasionen como consecuencia de la acción u omisión de las autoridades públicas. Así las cosas, como lo ha distinguido la jurisprudencia y la doctrina, a partir de este texto constitucional el deber resarcitorio o de reparación a cargo del Estado emerge cuando se ha causado un daño antijurídico que le sea imputable.

Es así como, dentro de este nuevo universo constitucional, la responsabilidad no está únicamente ligada al actuar negligente, culposo o doloso, es decir a criterios subjetivos, desplazándose a criterios objetivos, fundamentados en principios de justicia, equidad, solidaridad, etc., en donde la importancia gira alrededor de quien sufre el daño. Es así, como puede hallarse el Estado obligado a resarcir un perjuicio causado a pesar que su actividad o actuación esté dentro de los marcos de la licitud. Esta filosofía jurídica, argumentada desde hace varios años, se alimenta con la esencia del artículo 90 de nuestra Constitución al disponer la responsabilidad estatal por los daños antijurídicos.

El daño antijurídico es fuente de responsabilidad estatal y a su vez la teoría de la responsabilidad objetiva adquiere fundamento constitucional, razón por la cual surge la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado como el punto de intersección a través del cual encuadra cualquier régimen de responsabilidad. El concepto de daño antijurídico no ha sido definido en nuestra legislación, pero hace varios años la jurisprudencia colombiana ha venido formando la teoría de la Lesión resarcible fundamentada en el daño antijurídico, basados en la doctrina española, y es así como en distintos fallos emitidos por el Consejo de Estado se encuentra una concepción del daño antijurídico que lo consagra como el fundamento de todo deber y obligación de reparación. De ahí, que el objetivo de la responsabilidad patrimonial del Estado es el restablecer el equilibrio económico roto cuando se lesiona un patrimonio particular por parte de la administración pública. Se ha pasado de la llamada antijuricidad subjetiva, que exigía el dolo, la culpa o falta del funcionario de la administración para generar la responsabilidad del Estado, a la llamada antijuricidad objetiva, que tiene como fundamento el daño ocasionado a la víctima, que pasa a ser el elemento más importante de la responsabilidad patrimonial estatal.

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR FALLA DEL SERVICIO.

Se ejercita en este proceso el medio de control de Reparación Directa consagrada en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que es el que tiene toda persona interesada, para demandar la reparación del daño originado en los hechos, omisiones u operaciones de la Administración Pública, entre otras.

Debemos precisar los aspectos que nos llevan indefectiblemente a responsabilizar a la entidad pública de los perjuicios originados a los convocantes, pues como se logrará demostrar en el devenir del proceso, el suceso dañoso es atribuible por la falla del servicio en que incurrió, al omitir el cumplimiento de sus deberes legales; que permitió la precipitación del árbol sobre el inmueble propiedad de los reclamantes. Y es que para la



prosperidad del reclamo judicial es menester que se configuren tres elementos fácticos a saber: a) un hecho, operación, omisión e irregularidad que constituye la falta o falla del servicio; b) un daño o perjuicio antijurídico que debe ser real y cierto; y c) una relación de causalidad entre la falta o falla del servicio y el perjuicio causado.

“La falla del servicio ha sido y continúa siendo el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado. En efecto el daño causado es causado por el incumplimiento de una obligación a su cargo, o por el cumplimiento tardío, o la prestación irregular de dicho contenido obligacional. Y es que debemos entender que al Estado se le impone la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; si el daño ocurre, a pesar de su diligencia, no podrá quedar comprometida su responsabilidad”. En efecto, si al Juez Administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda de que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual.

La falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio, pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía

LA OMISIÓN COMO FACTOR DE FALLA EN EL SERVICIO.

“El mandato que impone la Carta Política en el artículo 2º inciso 2º, consistente en que las autoridades de la República tienen el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades ” debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera”, así, las obligaciones que están a cargo del Estado y por lo tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión, han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo.

Se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; por el contrario, si el daño ocurre pese a su diligencia no podrá quedar comprometida su responsabilidad.

La falla del servicio se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio, pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía.



La falla en el servicio se desprende de la prestación de un servicio estatal, que al no ser prestado en la forma debida genera un daño, lo cual le ocasiona perjuicios a unos particulares que no están en la capacidad de soportarlos, de este modo se deriva que el Estado tenga que responder directamente por ese daño ocasionado cuando sea causado por una falla en el servicio, lo cual se configura como nexos.

Tal como lo ha señalado la Sala en oportunidades anteriores, la falla médica involucra, de una parte, el acto médico propiamente dicho, que se refiere a la intervención del profesional en sus distintos momentos y comprende particularmente el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, incluidas las intervenciones quirúrgicas, y de otra, todas aquellas actuaciones previas, concomitantes y posteriores a la intervención profesional, que operan desde el momento en que la persona asiste o es llevada a un centro médico estatal, actividades estas últimas que están a cargo del personal paramédico o administrativo. Todas estas actuaciones integran el "acto médico complejo", que la doctrina, acogida por la Sala clasifica en: (i) actos puramente médicos; (ii) actos paramédicos, que corresponden a las acciones preparatorias del acto médico, que por lo general son llevadas a cabo por personal auxiliar, en la cual se incluyen las obligaciones de seguridad, y (iii) los actos extramédicos, que corresponden a los servicios de alojamiento y manutención del paciente, clasificación que tuvo relevancia en épocas pasadas para efectos de establecer frente a los casos concretos el régimen de responsabilidad aplicable y las cargas probatorias de las partes (...) Uno de los momentos de mayor relevancia en la prestación del servicio médico lo constituye el diagnóstico, porque a partir del mismo se define el tratamiento posterior. Las fallas en el diagnóstico de las enfermedades y el consecuente error en el tratamiento están asociadas, regularmente, a la indebida interpretación de los síntomas que presenta el paciente o a la omisión de la práctica de los exámenes que resultaban indicados para el caso concreto. Por lo tanto, cuando el diagnóstico no es conclusivo, porque los síntomas pueden indicar varias afecciones, se incurre en falla del servicio cuando no se agotan los recursos científicos y técnicos al alcance para determinar con precisión cuál es la enfermedad que sufre el paciente. En los casos en los que se discute la responsabilidad de la administración por daños derivados de un error de valoración, deberá estar demostrado que el servicio médico no se prestó adecuadamente porque se omitió interrogar al paciente o a su acompañante sobre la evolución de los síntomas que lo aquejaban; no sometió al enfermo a una valoración física completa y sería omitió utilizar oportunamente todos los recursos técnicos a su alcance para confirmar o descartar un determinado diagnóstico; dejó de hacerle el seguimiento que corresponde a la evolución de la enfermedad, o simplemente, incurrió en un error inexcusable para un profesional de su especialidad.

Tenemos que la E.S.E Hospital María Inmaculada, es una entidad del municipio de Florencia Caquetá, creada mediante la Ordenanza 014 del 5 de agosto de 1994 y con la misión y funciones atribuidas del acuerdo No. 00003 del 28 de febrero de 2018. Precisamente en el artículo 3 del citado acuerdo se reitera la naturaleza de la entidad como prestadora del servicio de salud.

DAÑO-IMPUTACIÓN – NEXO CAUSAL

Las pruebas aportadas a esta solicitud demuestran los elementos de la responsabilidad contra E.S.E Hospital María Inmaculada, que produjo perjuicios a mis mandantes.

La falla del servicio está demostrada con las pruebas de la omisión y falla del servicio por parte de la entidad.



Está probado que la señora **LEONOR ALMARIO DE SABI** perdió la vida luego de que le suministraran medicamentos diferentes a los establecidos en formula que llevaba y sus familiares han tenido que padecer un daño antijurídico por la pérdida de la señora Leonor, dolor que no tenían el deber de soportar, causado por la omisión, negligencia y falla del servicio de E.S.E Hospital María Inmaculada, Asmet Salud E.P.S, Ministerio de Salud y Protección Social y Secretaria de Salud Departamental; razón por la cual deben responder patrimonialmente por el perjuicio ocasionado.

La falta de practica de exámenes y un tratamiento adecuado para el caso, fueron las que ocasionaron la muerte de la señora LEONOR ALMARIO DE SABI. Dispone el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo:

"La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa de la petición sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos".

En el caso *sub judice*, no hay circunstancias que libere a la entidad de responsabilidad en el ejercicio de la actividad MEDICA, por el resultado de dicho proceso, el cual dejó un daño a la vida, generando daños materiales e inmateriales a su familia

Pero más allá, y sin necesidad de recurrir a este tipo de regímenes que se derivan de un tipo específico de obligación, en este caso, no hay duda de que el daño fue producto de una evidente falla del servicio, puesto que está demostrado que la entidad fue negligente e irresponsable y omitieron el tratamiento que la señora LEONOR ALMARIO llevaba y sin practicarle todos los exámenes necesarios para tomar la decisión correcta. Como esto no se hizo se produjeron las graves consecuencias antes relacionadas tanto para la misma como para sus familiares.

9

De modo que fue la conducta negligente del ente demandado que desencadenó el daño que se reclama, razón por la cual se configura la Falla del servicio.

La acción de reparación directa es en consecuencia procedente ante el hecho dañoso consistente en la falla del servicio imputable a E.S.E Hospital María Inmaculada, Asmet Salud E.P.S, Ministerio de Salud y Protección Social y Secretaria de Salud Departamental. No hay lugar a exonerar a la entidad mencionada. Por lo tanto, ésta deberá indemnizar los daños causados a los demandantes por haber incurrido en una falla del servicio.

MEDIO DE CONTROL A EJERCER

Manifiesto que el Medio de Control a ejercer es el de Reparación Directa, contemplado en el Art. 140 de la Ley 1437 de 2011.

PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA

Se trata de un proceso Contencioso Administrativo de Reparación Directa, consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, que debe tramitarse según lo dispuesto en la Parte II, Título V, Capítulo V, Art. 152 Núm. 5, y Arts. ss., del C.P.A.C.A. por cuya naturaleza, cuantía y lugar donde ocurrieron los hechos es



Multiasesorias Jurídicas
Costain



ese Honorable Tribunal Administrativo el competente para conocer del mismo en primera instancia.

CUANTÍA

Al momento de la presentación de la demanda, conforme a las reglas del artículo 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, **sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales**, así mismo la norma también consagra que cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor, en el caso en concreto, la mayor de las pretensiones (sin tener en cuenta los Daños Morales) corresponde a **SEISCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (600 SMMLV)**, los cuales equivalen a SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 600.000.000), rubro que se solicita dentro de la modalidad de DAÑOS MATERIALES.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

De conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo el presente MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA no ha caducado, encontrandonos dentro del término, dado que los hechos ocurrieron el 27 de julio de 2021.

10

ARANCEL JUDICIAL

Según lo establecido por La Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia C-169 del 19 de marzo del 2014, Magistrado Ponente María Victoria Calle Correa, que resuelve Declarar INEXEQUIBLE la Ley 1653 de 2013 '*Por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones*', motivo por el cual no se aporta el requisito que antes debía estar contenido en el cuerpo de la demanda.

PRUEBAS Y ANEXOS

Me permito adjuntar para el correspondiente valor probatorio, los siguientes documentos que tendrá como propósito sustentar lo afirmado.

Documentos:

1. Copia completa de la Historia Clínica de la señora **LEONOR ALMARIO DE SABI**.
2. Copia del Registro de Defunción de la señora **LEONOR ALMARIO DE SABI**.
3. Copia de la Cédula de Ciudadanía de la señora **LEONOR ALMARIO DE SABI**.



4. Copia de los Registro Civil de Nacimiento y de Cédula de Ciudadanía de:

- **María Ester Sabi Almario.**
- **Albenys Sabi Almario.**
- **José María Sabi Almario.**
- **Benjamín Sabi Almario.**
- **Abundio Sabi Almario.**
- **Edgar Sabi Almario.**
- **María de los Milagros Sabi Almario.**
- **Octavio Sabi Almario.**
- **Bellanide Sabi Almario.**
- **Sandra Milena Sabi Almario.**
- **Marleni Sabi Almario.**
- **José Joaquín Sabi Almario.**

5. Copia de la Cédula de Ciudadanía y Tarjeta Profesional del suscrito abogado.

6. Copia de los Poderes otorgados, debidamente autenticados.

7. Copia de Constancia de no conciliación, emitida el 26 de septiembre de 2022.

Testimoniales:

1. **MAURICIO AYALA HENAO**, ciudadano colombiano, hombre mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Florencia-Caquetá, identificado con Cédula de Ciudadanía No.17.640.734, quien podrá ser notificado en la Carrera 14A No.3B-48, Barrio Versalles de la ciudad de Florencia-Caquetá, o al correo electrónico maurhos33@yahoo.es, o al abonado celular 3112542115.

2. **YAQUELINE BONILLA ESCALANTE**, ciudadana colombiana, mujer mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Florencia-Caquetá, identificada con Cédula de Ciudadanía No.26.428.063, quien podrá ser notificada en el kilómetro 10 de la vía que de Florencia conduce a Neiva-Huila, Vereda la Carbona de Florencia-Caquetá, o al abonado celular 3115752915.

3. **MIRIAN GONZALES OME**, ciudadana colombiana, mujer mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Florencia-Caquetá, identificada con Cédula de Ciudadanía No.40.730.397, quien podrá ser notificada en la manzana 35, casa 17 del Barrio el Timi de la ciudad de Florencia-Caquetá, o al abonado celular 3183643446.

4. **CLARA LUCIA MONTAÑO CORREA**, ciudadana colombiana, mujer mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Florencia-Caquetá, identificada con Cédula de Ciudadanía No.55.113.653, quien podrá ser notificada en el kilómetro 15 de la vía que de Florencia conduce a Neiva-Huila, Vereda la Caraño de Florencia-Caquetá, o al abonado celular 3112638391.

NOTIFICACIONES

Los demandantes y el suscrito Abogado podrán ser notificados en la Carrera 13 No.15-42, Oficina 301-G, Edificio El Líder en el Centro de la ciudad de Florencia-Caquetá, o al email multiasesoriasjuridicascostain@gmail.com, o a los abonados 3112912893-312514 4234.

A los demandados:



Multiasesorias Jurídicas
Costain



E.S.E Hospital María Inmaculada, podrá ser notificado en la diagonal 20 No.7-29 de la ciudad de Florencia-Caquetá, o al abonado telefónico 608-4366464, o a los correos electrónicos ventanillaunica@hmi.gov.co - notificacionesjudiciales@hmi.gov.co.

Asmet Salud E.P.S, podrá ser notificado en la Carrera 8B No.6-53, Barrio Las Avenidas, de la ciudad de Florencia-Caquetá, o al abonado 608-4352160, o a los correos electrónicos operaciones.caqueta@asmetsalud.org.co - notificacionesjudiciales@asmetsalud.com.

Ministerio de Salud y Protección Social, en la Carrera 13 No.32-76 de la ciudad de Bogotá D.C, o al abonado 601-3305043, o a los correos electrónicos correo@minsalud.gov.co - Notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co.

Secretaria de Salud Departamental, en la Calle 18 No.8-58, de la ciudad de Florencia-Caquetá, o a los correos electrónicos salud@caqueta.gov.co - ofi_juridica@caqueta.gov.co, o al abonado telefónico 608-4366860.

De esta manera y con sumo respeto dejo a usted la presente demanda.

Respetuosamente,

CONSTANTINO COSTAIN FLOR CAMPO

C.C. No.17.639.583 de Florencia-Caquetá
T.P. No.248.009 del C.S. de la J.

Elaboró: Dani B. U.